



U.S. DEPARTMENT OF STATE
DIPLOMACY IN ACTION

INFORME SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA INTERNACIONAL 2018

ARGENTINA

Resumen

La Constitución y las leyes garantizan la libertad religiosa y el derecho de las personas a profesar libremente su culto. La Constitución dispone que el gobierno federal otorgará condición jurídica preferencial a la Iglesia Católica Apostólica Romana, si bien el Estado no profesa ninguna religión oficial. Por ley, la educación pública son laicas, pero las escuelas privadas dirigidas por instituciones religiosas registradas están habilitadas para recibir subsidios gubernamentales. El gobierno prosiguió con su investigación del atentado terrorista perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En marzo, el tribunal de Casación ratificó la petición de un juez federal relacionada con la detención de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por los cargos de “encubrimiento agravado” por el presunto intento de encubrir, mediante la firma de un memorando de entendimiento con Irán, la posible participación de dicho país en el atentado contra la AMIA. En septiembre durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Mauricio Macri pidió apoyo internacional a los reclamos del gobierno para que Irán coopere con la investigación en curso para esclarecer el atentado contra la AMIA y el atentado terrorista perpetrado contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. Asimismo, prosiguieron las indagaciones sobre la muerte de Alberto Nisman, ex fiscal especial a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA. En abril un grupo de padres y madres en la provincia de Tucumán presentó un amparo en la justicia local para que se deje de enseñar religión en las escuelas públicas de dicha provincia, amparándose en un fallo emitido en 2017 por la Suprema Corte, que declaraba inconstitucional la enseñanza religiosa en horario escolar en las escuelas públicas. En el amparo también se adujo que los docentes estaban enseñando exclusivamente catolicismo en las escuelas. El gobierno patrocinó eventos interreligiosos durante el año, que contaron con la participación activa de funcionarios gubernamentales.

Según distintos informes de los medios de difusión, hubo un considerable debate cívico acerca de la separación de la Iglesia y el Estado, a la luz de un proyecto de ley para legalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo, que el Senado rechazó el 9 de agosto. Manifestantes a favor y en contra del proyecto de ley, que incluyeron muchos provenientes de grupos religiosos, realizaron manifestaciones nocturnas masivas y mayormente pacíficas frente al Congreso, antes de la votación de dicho proyecto que tuvo lugar el 14 de junio y el 9 de agosto. La Iglesia Católica y la Cristiana Evangélica denunciaron la existencia de pintadas ofensivas en todo el país, que atribuyeron a personas contrarias a la posición religiosa frente al aborto.

Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos se reunieron con altos funcionarios del gobierno, incluidos el secretario de Culto y funcionarios tanto de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para dialogar sobre maneras de promover el respeto por las minorías religiosas y contrarrestar la discriminación por motivos de religión. Las actividades de alcance comunitario llevadas a cabo por la embajada abarcaron reuniones periódicas con funcionarios de gobierno, líderes religiosos y de la comunidad para conversar sobre colaboración interreligiosa y fomentar una mayor participación de las comunidades religiosas en los programas educativos y de becas auspiciados por la embajada. Un funcionario del Departamento de Estado se reunió con líderes religiosos y funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso inclusive, para abordar cuestiones relacionadas con la libertad religiosa.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos estima una población total de 44.700.000 habitantes en todo el país (cifras estimativas de julio de 2018). Los datos sobre religión, tanto demográficos como estadísticos, de organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de investigación y líderes religiosos, varían entre sí. Según un estudio del Pew Research Center de 2014, la comunidad Católica Apostólica Romana representa el 71% de la población. Los protestantes constituyen el 15% y los ateos, agnósticos y quienes no profesan ninguna religión, representan el 11% de la población. Hay otras fuentes según las cuales los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Iglesia bautista, testigos de Jehová, luteranos, metodistas y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), considerados juntos, representan el 3% de la población. Según el estudio del Pew Research Center, la población judía representan aproximadamente el 0,5% de la población y la comunidad musulmana

constituyen estimativamente un 1%. Las comunidades evangélicas protestantes, especialmente los pentecostales, están aumentando, si bien no se cuenta con estadísticas confiables. También existen en el país pequeñas comunidades bahá'ís, budistas y practicantes de religiones de pueblos originarios, sin embargo, no existen datos sobre el tamaño de dichos grupos.

Sección II. Situación de respeto del gobierno a la libertad religiosa

Marco jurídico

La Constitución garantiza el derecho a las personas a profesar, enseñar y practicar libremente su culto y estipula que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romana, si bien la Corte Suprema dictaminó que dicho culto no reviste carácter de religión oficial del Estado argentino.

El gobierno otorga a la Iglesia católica asignaciones libres de impuestos, privilegios institucionales tales como subsidios a escuelas, amplia autonomía para sus escuelas parroquiales y preferencias en el otorgamiento de licencias sobre radiofrecuencias. La ley no requiere que la Iglesia católica se inscriba ante la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La inscripción tampoco es obligatoria para otros grupos religiosos, si bien los grupos registrados reciben la misma condición y beneficios fiscales que la Iglesia católica, que incluye la exención impositiva, la posibilidad de solicitar visas para sus funcionarios religiosos y de desarrollar actividades públicas. A los fines de la inscripción, los grupos religiosos deben contar con un lugar para la práctica del culto, carta orgánica y clero ordenado; entre otros requisitos.

No se requiere inscripción para la realizar servicios religiosos privados tales como los que se organizan en casas particulares, si bien ocasionalmente es necesario para realizar actividades en espacios públicos de conformidad con las disposiciones locales. Las autoridades de la Ciudad pueden requerir que los grupos obtengan permisos para utilizar espacios públicos para actividades públicas, y pueden requerir que el grupo religioso se encuentre inscripto ante la Secretaría de Culto para dicho permiso. Una vez que la organización se encuentra inscripta en el registro, debe informar a dicha secretaría acerca de cualquier cambio o decisión importante que afecten a sus líderes, estructura organizacional, cantidad de miembros o domicilio de su sede principal.

Por ley, los contenidos básicos obligatorios de la educación pública son laicos. En algunas escuelas públicas, los alumnos pueden recibir instrucción especial en la

religión de su elección, que se pueden impartir en la propia escuela o en una institución religiosa. Una gran cantidad de grupos cristianos, judíos y musulmanes cuentan con colegios privados, que reciben apoyo financiero sujeto a su inscripción estatal.

Los funcionarios religiosos extranjeros pertenecientes a grupos religiosos inscriptos pueden solicitar una categoría especial de visa para ingresar en el país, cuyo período de validez varía en función de la finalidad del viaje. Los misioneros extranjeros pertenecientes de grupos religiosos inscriptos deben presentar su solicitud ante la Secretaría de Culto, que a su vez notifica a las autoridades inmigratorias para que se emita la documentación pertinente.

El directorio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuenta entre sus miembros con representantes de los principales grupos religiosos. El INADI investiga denuncias de presuntos hechos o casos de discriminación por motivos religiosos. El INADI no posee autoridad para hacer vinculantes sus recomendaciones o hallazgos, si bien los informes pueden ser utilizados como prueba en los tribunales civiles. El organismo también brinda apoyo a las víctimas de discriminación religiosa y promueve medidas proactivas para prevenir la discriminación. Asimismo, elabora y distribuye publicaciones para promover la tolerancia religiosa.

Argentina es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del gobierno

En marzo el tribunal de Casación ratificó un dictamen federal contra la senadora y ex presidenta Fernández de Kirchner, a quien se le habían formulado cargos de “encubrimiento agravado”, por alegarse que el memorando de entendimiento firmado en 2013 por su gobierno tenía como fin encubrir la presunta participación iraní en el atentado cometido en 1994 contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, en el cual murieron 85 personas. En noviembre prescribió la solicitud de desafuero presentada por el tribunal de primera instancia al no lograrse quórum en la correspondiente sesión del Senado. Si bien un nuevo tribunal hubiera podido interponer un nuevo pedido, el Congreso no hubiera tenido capacidad para actuar sobre la medida hasta la apertura del nuevo período de sesiones parlamentarias en marzo de 2019. La señora Fernández de Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman, quien falleció el 30 de diciembre, y otros 11 funcionarios fueron

acusados formalmente en diciembre de 2017 y hacia fin de año se encontraban a la espera de juicio.

En septiembre, durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Macri reclamó apoyo internacional en favor de las demandas argentinas para que Irán coopere en la investigación en curso del atentado contra la AMIA y del atentado terrorista de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires.

A mediados de noviembre concluyeron los alegatos finales en el caso del atentado contra la AMIA, en los que se procuraba establecer la complicidad local en dicho atentado cometido en 1994, incluidas las acusaciones contra el ex presidente Carlos Menem y otros ex funcionarios de seguridad e inteligencia. La parte oral, que es la última del juicio, proseguía a fin de año. En octubre de 2017, Interpol renovó alertas rojas en busca de la localización y el arresto de cinco iraníes, un libanés y un colombiano por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.

Durante el año prosiguió la investigación judicial sobre el caso de Alberto Nisman, fiscal federal especial a cargo de la investigación del atentado de 1994 contra la AMIA, que fuera asesinado en 2015. El 2 de junio un tribunal federal de apelaciones ratificó el dictamen preliminar del tribunal inferior que avalaba el asesinato de Nisman. En diciembre de 2017, un juez federal acusó formalmente a Diego Lagomarsino, ex asistente de Nisman, como partícipe necesario de su muerte, así como a cuatro oficiales de seguridad por encubrimiento penal y por no haber garantizado la seguridad de Nisman.

Por primera vez en 26 años, el gobierno del Presidente Macri celebró junto a la comunidad judía y a la Embajada de Israel una conmemoración pública del atentado terrorista de 1992 cometido contra la embajada israelí en Buenos Aires, y funcionarios del gobierno expresaron su compromiso a favor de la transparencia y de la búsqueda de justicia.

En abril, un grupo de padres y madres en la provincia de Tucumán entabló una demanda contra la incorporación de un plan de estudios religioso en las escuelas públicas de dicha provincia, amparándose en una sentencia emitida en 2017 por la Suprema Corte, por la cual la incorporación de educación religiosa en las escuelas públicas se consideraba inconstitucional. En la demanda también se adujo que los docentes estaban enseñando exclusivamente catolicismo en las escuelas. Observadores políticos comentaron que las leyes educativas de las provincias de

Catamarca, Córdoba, La Pampa y San Luis tenían cláusulas similares que podrían ser objeto de revisión judicial. En diciembre de 2017, en el marco de un juicio promovido por la Asociación de Derechos Civiles y apoyado por padres y madres y por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la Suprema Corte dictaminó que la incorporación de educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta era anticonstitucional. Según informes de los medios de difusión, con posterioridad, el gobierno de esa provincia se abocó a eliminar la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas, si bien dichas clases siguieron siendo opcionales en algunas escuelas.

El secretario de culto Alfredo Abriani priorizó públicamente la aprobación de un proyecto de ley sobre libertad de culto, presentado por primera vez en 2017; no obstante, hacia fin de año no se había actuado al respecto. El proyecto de ley eliminaría el requisito de que los grupos religiosos no católicos se inscriban ante el gobierno para recibir los mismos beneficios que los otorgados a la Iglesia católica, posibilitaría las objeciones de conciencia por motivos religiosos y protegería la indumentaria confesional, los feriados religiosos y los días de culto de dichos grupos.

El 24 de agosto, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en representación de la Iglesia católica, anunció su intención de dejar de recibir determinados fondos públicos suministrados como apoyo financiero directo por el gobierno nacional. El 3 de noviembre, el grupo anunció que estaba negociando con el gobierno del Presidente Macri para reducir dichos fondos, destinados principalmente a los sueldos de obispos y seminaristas católicos. El apoyo financiero por parte del Estado ascendió a aproximadamente 152 millones de pesos argentinos (US \$4,04 millones) durante el año; es decir, un 7% del presupuesto anual de la Iglesia. Si bien el congreso aprobó el presupuesto nacional de 2019, no difundió las asignaciones del gobierno a la Iglesia católica. El secretario de culto Abriani indicó que el presupuesto nacional incluiría asignaciones a la misma. Representantes de la Iglesia siguieron analizando medidas para depender menos del financiamiento proporcionado por el gobierno federal.

Muchos grupos judíos calificaron como positivas y productivas sus relaciones con el gobierno de Macri. Prosiguió la colaboración estrecha entre esos grupos y el gobierno, especialmente a la luz del compromiso de las autoridades con la resolución de la muerte de Nisman y la búsqueda de justicia en las investigaciones del atentado de 1994 contra la AMIA y del atentado terrorista de 1992 contra la Embajada de Israel.

El secretario de Culto Abriani, el secretario de Derechos Humanos, el director general de Culto de Buenos Aires y otros representantes gubernamentales siguieron auspiciando y asistiendo a conferencias sobre libertad religiosa, diálogos interreligiosos, ordenaciones de rabinos, oficios católicos y celebraciones de las festividades de Rosh Hashanah, Eid al-Adha y Eid al-Fitr, así como otras actividades religiosas, incluidas las de iglesias protestante y ortodoxa. Los días 4 y 5 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires fue sede del Tercer Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, destinado a promover el diálogo y el entendimiento interreligioso. Los participantes incluyeron a representantes de la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia Apostólica Armenia, la Comunión Anglicana Episcopal Ortodoxa y la Iglesia de Jesucristo, así como también el Seminario Rabínico Latinoamericano y el Instituto Islam para la Paz.

El 22 de agosto, la Ciudad de Buenos Aires fue sede de un festival interreligioso, celebrado en el Centro de Convenciones de la Costanera Sur, que puso de relieve la diversidad de comunidades religiosas del país. Según funcionarios del gobierno local, el evento buscaba reconocer y celebrar la diversidad de credos en Buenos Aires.

Del 26 al 28 de septiembre el gobierno auspició el quinto Foro Interreligioso Anual del Grupo de los 20 (G20) organizado por grupos internacionales religiosos y de la sociedad civil. La conferencia abordó el tema de la Cumbre del G20 de 2018: “Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”, desde un punto de vista religioso. La vicepresidenta Gabriela Michetti pronunció el discurso de apertura.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, 500 jóvenes provenientes de más de 15 países participaron en el III Encuentro Mundial de Jóvenes auspiciado por organizaciones religiosas judías y de otras religiones con apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El INADI siguió promoviendo campañas educativas en escuelas públicas y privadas para un mejor entendimiento de la tolerancia religiosa y el respeto por la diversidad entre los jóvenes. El 26 de julio, dicho instituto anunció una nueva alianza con el sector privado, denominada “Empresas por la Diversidad”, para contrarrestar la discriminación y promover la diversidad en el lugar de trabajo y la diversidad religiosa. Asimismo, el 10 de julio el INADI firmó un memorando de cooperación con la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos para contrarrestar la discriminación por motivos religiosos en el deporte. El instituto

siguió trabajando con UNICEF para combatir el acoso cibernético, incluida la discriminación religiosa.

En abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto entregó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) copias de aproximadamente 140.000 documentos de la época del Holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, para fines de investigación.

El gobierno es miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Sección III. Situación de respeto de la sociedad por la libertad de culto

Según informes de los medios de comunicación, un proyecto de ley para legalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo dio lugar a un diálogo cívico sobre temas relacionados con la separación entre la Iglesia y el Estado. El proyecto de ley fue presentado por 71 legisladores el 6 de marzo y posteriormente la Cámara de Diputados lo aprobó el 14 de junio por escaso margen (129 votos a favor y 125 en contra). Finalmente, el 9 de agosto, el Senado rechazó el proyecto por 38 votos en contra y 31 a favor. Antes de la votación del proyecto el 14 de junio y el 9 de agosto, personas a favor y en contra de la propuesta, que incluían miembros de muchos grupos religiosos, realizaron manifestaciones nocturnas masivas y generalmente pacíficas frente al Congreso. Las protestas contra el proyecto de ley provinieron mayormente de grupos religiosos. El 7 de junio, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizó una celebración interreligiosa conjunta contra el aborto en la que participaron líderes musulmanes, judíos y cristianos evangélicos. El 4 de agosto la ACIERA, la mayor asociación evangélica del país, organizó una marcha masiva contra la legalización del aborto. A su vez, el 8 de agosto el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mario Aurelio Poli, celebró una misa pública por la vida. El 18 de agosto, tras el rechazo del proyecto de ley sobre el aborto, medios de prensa católicos informaron que miles de personas habían renunciado a su fe católica de manera organizada y pública, y señalaron que esos actos eran ejemplo de una creciente confrontación entre las autoridades de la Iglesia católica y los feligreses partidarios de una mayor separación entre dicha institución y el Estado.

La Iglesia católica y la Iglesia evangélica denunciaron la existencia de pintadas en todo el país realizadas por personas que estaban en contra de la oposición religiosa al aborto. El 9 de marzo aparecieron pintadas a favor de la legalización del aborto en la Catedral Metropolitana, la sede central de la Policía y varias escuelas

católicas de la provincia de Salta. El 9 de agosto, manifestantes pintaron grafitis de esa misma índole en las puertas principales y paredes de la iglesia de la Sagrada Familia en la provincia de Neuquén. El 13 de septiembre, personas no identificadas pintaron leyendas anticatólicas en las paredes de la escuela secundaria parroquial de San Justo ubicada en la provincia de Buenos Aires. El 11 de agosto, la ACIERA denunció destrozos en varias iglesias miembro de todo el país en relación con el debate sobre la legalización del aborto.

Los medios de prensa informaron que una profesora de una escuela secundaria católica de Buenos Aires había aparecido en un video justificando el antisemitismo y diciendo que Hitler había hecho “cosas buenas”. En mayo las autoridades escolares retiraron de su cargo a la profesora Denise Yanet Evequoz después de que un video de su clase grabada en 2015 se propagó de manera viral por las redes sociales. La profesora Evequoz defendió sus declaraciones y no ofreció disculpas.

En mayo, el periodista Santiago Cuneo declaró en un programa de televisión que el presidente Macri era socio político del sionismo internacional y que su gobierno había incorporado agentes de inteligencia israelíes en el organismo de inteligencia del país. Mientras el programa seguía al aire, el señor Cuneo también insultó personalmente a un miembro judío del gabinete presidencial y a un empresario de esa misma religión. La DAIA condenó públicamente las declaraciones del periodista y dijo que formularía cargos de discriminación en su contra. El señor Cuneo renunció tras el incidente, pero no se retractó de sus dichos.

El 28 de agosto, los medios informaron que personas no identificadas y por motivos desconocidos habían prendido fuego la Catedral de San Roque en Córdoba, con los consiguientes daños a la propiedad. La iglesia data de 1760 y es un monumento histórico nacional. Para fin de año no se había informado acerca de la detención de ninguna persona en relación con este incidente.

El 6 de septiembre, dos miembros del Congreso promovieron una audiencia pública sobre la separación entre Iglesia y Estado, en la que líderes de la sociedad civil, expertos jurídicos y políticos se refirieron a la influencia de la religión en las instituciones nacionales y destacaron la necesidad de igualdad entre las distintas comunidades religiosas. Mencionaron que el Congreso tenía pendiente el tratamiento de nueve proyectos de ley relacionados con la igualdad en la consideración de las comunidades religiosas por parte del gobierno como así también con la eliminación de los privilegios concedidos a la Iglesia católica. El 15 de septiembre cerca de treinta personas protestaron por la falta de separación entre la Iglesia y el Estado, renunciando públicamente a su fe católica en las escalinatas

de la Catedral Metropolitana y presentaron a la CEA los nombres de otras 5.000 personas que habían renunciado a dicha fe.

En 2017 la DAIA documentó 404 denuncias de antisemitismo, en comparación con 351 registradas en 2016. El 88% de los incidentes denunciados se produjo en las redes sociales. La DAIA siguió trabajando sobre las denuncias de acoso verbal, físico y en línea o de comentarios antisemitas, así como de lenguaje antisemita en espacios públicos, incluidas las redes sociales y la prensa tradicional, y en manifestaciones y protestas. La institución no presentó ningún análisis sobre el aumento de casos.

Entre marzo y mayo, antes de la Copa Mundial de Fútbol, el Museo River, ubicado en uno de los estadios más grandes de Buenos Aires, realizó una exposición sobre el Holocausto titulada “No fue un juego”. El museo recibió unos 25.000 visitantes por mes. La exposición presentó historias sobre el fútbol durante la época del Holocausto y destacó a Emérico Hirschl, director técnico de nacionalidad húngara y religión judía que llevó al equipo de River Plate a conquistar campeonatos nacionales e internacionales en los años treinta y convenció a autoridades de Puertos para que permitieran a los judíos entrar por los puertos de Buenos Aires.

El 21 de noviembre la Organización mundial para la juventud MENORA y la ONG local La Alameda celebraron su primer partido de fútbol por la paz en Buenos Aires, entre dos equipos interreligiosos mixtos compuestos por inmigrantes musulmanes senegaleses y jóvenes jugadores judíos, para promover la fraternidad y el entendimiento entre las dos comunidades religiosas.

Según el señor Adalberto Assad, presidente de la Confederación Argentina de Entidades Árabes, existía un sentimiento antimusulmán en el país, que es sede de una de las organizaciones islámicas más activas de América Latina (Organización Islámica de América Latina) y de la mayor mezquita de la región (Centro Cultural Islámico Rey Fahd). En un artículo publicado en noviembre en el sitio web del canal de televisión shia Annur TV, recién inaugurado, el señor Assad dijo que “hay una persecución a la comunidad islámica en la Argentina...Esto que está pasando ahora, no se ha visto nunca”. El artículo luego menciona la detención y el allanamiento domiciliario efectuado justo antes de la Cumbre de los Líderes del G20 y dispuesto contra dos hermanos musulmanes acusados de tener vínculos con Hezbollah y un presunto depósito de armas.

En la provincia de Mendoza, a una musulmana se le denegó acceso a la piscina de un club de natación privado – Termas de Cacheuta – porque usaba burkini. El club

permite a los bañistas entrar al agua solamente con bikinis o trajes de baño de una sola pieza. Un empleado que controlaba los ingresos a la piscina le impidió entrar porque el burkini no pertenecía a ninguna de las dos categorías. El empleado dijo que la señora podía usar las demás instalaciones del lugar, pero no entrar al agua. Tras ello, la señora acudió al empleado que le había vendido la entrada y recibió un reembolso. Posteriormente, la señora radicó una denuncia formal ante el INADI en la que detalló lo sucedido. El instituto declaró que la mujer tenía razón en su denuncia y que el lugar había violado la ley al denegarle acceso a la piscina.

Grupos interreligiosos tales como Religiones para la Paz, que nuclean a miembros de la religión católica, protestante, evangélicos, judíos, musulmanes, bahá'íes y originarios, así como el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, siguieron trabajando para aumentar las oportunidades de acción multirreligiosa frente a desafíos comunes de la sociedad. El 6 de diciembre, los líderes del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), la AMIA y la CEA firmaron un documento para promover el diálogo interreligioso y la paz. Esa declaración, que es una versión actualizada de un documento similar firmado en 2005 por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio y sus homólogos de la comunidad interreligiosa, afirmó el compromiso de todos los interesados para no permitir que los conflictos religiosos de otras partes del mundo afectaran la fraternidad entre las comunidades religiosas del país.

Sección IV. Política e interacción del gobierno de los Estados Unidos

Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos se reunieron con representantes del gobierno, incluidos el secretario de Culto, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para dialogar sobre maneras de promover el respeto por las minorías religiosas y la cooperación interreligiosa. En reuniones con funcionarios de gobierno nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires, el embajador y otros funcionarios de la embajada dialogaron sobre tolerancia, movimiento interreligioso en el país y medidas para contrarrestar la discriminación religiosa. En reuniones con la Secretaría de Culto, funcionarios de la embajada destacaron la importancia de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso como así también conversaron sobre el estado de la causa AMIA y maneras de contrarrestar el antisemitismo y el sentimiento antimusulmán.

Las actividades de alcance comunitario llevadas a cabo por la embajada abarcaron reuniones periódicas con líderes religiosos y de la comunidad, incluidos miembros de organizaciones interreligiosas. En dichas reuniones, funcionarios de la embajada

conversaron sobre el estado de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso como así también de las condiciones y la integración de los refugiados, independientemente de su religión, el estado de la causa AMIA y maneras de contrarrestar el antisemitismo y el sentimiento antimusulmán y de promover la tolerancia religiosa. Funcionarios de la embajada se reunieron con grupos religiosos y ONG centrados en el trabajo social y el servicio comunitario, que incluyeron líderes católicos, adventistas del Séptimo Día y evangélicos. Durante dichos encuentros, se abordaron temas como las respuestas de raíz religiosa a la pobreza, la drogadicción, la violencia doméstica, la falta de techo y la desnutrición, así como la promoción del respeto por la diversidad religiosa. En agosto, en una conferencia celebrada en la provincia de Tucumán, el embajador pronunció un importante discurso en el que se refirió a la manera de contrarrestar la incitación al odio en línea y la discriminación por motivos religiosos. También auspició reuniones con miembros de la comunidad judía durante el año para conversar sobre los avances en la causa del atentado contra la AMIA. En septiembre, un funcionario del Departamento de Estado pronunció unas palabras de apertura en el Foro Interreligioso del G20. También se reunió con líderes religiosos y funcionarios de gobierno, incluidos miembros del Congreso, para abordar el tema de la libertad de culto en todo el mundo.

Funcionarios de la embajada estadounidense asistieron en forma periódica a conferencias, ceremonias religiosas y actos conmemorativos organizados por grupos religiosos y ONG tales como la DAIA, la AMIA, el Congreso Judío Latinoamericano, la CEA, el CIRA, el Instituto Islam para la Paz, la Iglesia Evangélica de Argentina y el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. El embajador habló en varios de esos eventos, entre ellos una ceremonia conmemorativa celebrada en la AMIA y una conferencia realizada en la provincia de Tucumán sobre delitos de incitación al odio. Funcionarios de la embajada siguieron alentando una mayor participación y diversidad de las comunidades religiosas en los programas educativos y de becas auspiciados por la embajada. Asimismo, apoyaron la cooperación interreligiosa y el respeto universal por la libertad de culto, tanto a través de declaraciones públicas como de campañas en las redes sociales.